

Crónicas de la destrucción

Canadá y Turquía se deshacen de documentos históricos

CARLOS DÍAZ REDONDO Y BEATRIZ MIMOSA [@carlosdiazred](#) | [@BeatrizMimosaG](#)

El patrimonio documental de Canadá y de Turquía vive tiempos oscuros. Dos países alejados, con grandes diferencias sociales, culturales, políticas y económicas, pero que en el fondo hoy van a darse la mano. Acabamos de saber, a través de una moción publicada a principios del pasado mes de octubre, que la Corte Suprema de Canadá ha autorizado finalmente la destrucción de miles de documentos sobre los terribles abusos cometidos en las escuelas residenciales, fundadas a mediados del siglo XIX y cofinanciadas por cierto, por el gobierno y por las Iglesias presbiterana, anglicana y católica, para la ilustración de las denominadas Naciones Originarias canadienses. La moción llega avalada por decisión unánime, en contra de los deseos del Gobierno federal, que consciente del altísimo valor histórico de los expedientes, pretendía incorporarlos a la Biblioteca y Archivos de Canadá, omitiendo, eso sí, los nombres de las víctimas con el fin de salvaguardar su privacidad.

Estos centros "educativos", que como ya decíamos hace tres años en nuestro Archivos 93 (2014, pp. 15-16) cerraron sus puertas en el año 1996, dejaron tras de sí una estela macabra de muerte, en la que perecieron más de 6.000 niños y jóvenes. Un genocidio en toda regla contra



más de 150.000 nativos aborígenes, reconocido públicamente el pasado septiembre ante la Asamblea General de





la ONU por el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, que calificó esta etapa oscura en la historia del país como un cúmulo de humillaciones, prohibiciones y abusos.

El caso había dividido literalmente a la opinión pública y a la comunidad aborigen que padeció las crueldades de este sistema, pues por un lado se alzaban voces que exigían preservar toda la documentación como testigo de uno de los capítulos más horribles de la historia del país y se pudiera tener constancia de ello de forma palpable, en contra de aquellos que preferían la destrucción, que todo lo borra y evita daños adicionales a los descendientes de las víctimas.

Ya la Comisión Canadiense de la Verdad y la Reconciliación había presentado un informe con diferentes propuestas a la autoridad competente

después de recoger los testimonios de más de 6.000 supervivientes y exempleados de estas escuelas. La autoridad hizo mutis por el foro, a pesar de que los distintos gobiernos canadienses fueron artífices y cómplices de estos campos de concentración encubiertos al fomentar y permitir su funcionamiento buscando claramente dos objetivos: por un lado, el gobierno se desligaba de sus obligaciones legales y financieras con los nativos aborígenes, y por otro, se hacía con el control de sus tierras.

Ahora, publicada la moción, se establece una tregua en la que los expedientes –más de 38.000 documentos– permanecerán archivados quince años antes de ser mandados a la trituradora, tiempo suficiente para evaluar las posibles demandas de compensación de los familiares de las víctimas de

estas escuelas del horror. Una vez cumplido este plazo, los supervivientes tendrán la opción de decidir si quieren que su expediente se salve de este holocausto de papel o si, por el contrario, lo mandan al olvido. A este respecto, Carolyn Bennett, ministra de Relaciones con los Indígenas y las Poblaciones Norteñas, ha expresado su frustración y desacuerdo con la decisión de la Corte Suprema, que quizá no sea del todo consciente de que al planificar la destrucción de estos documentos, está borrando de un plumazo un pedazo de la historia del país, llevándose por delante una buena parte de la memoria histórica de la comunidad aborigen.

A la par, algo parecido viene sucediendo en Turquía, aunque por razones ligeramente diferentes. Tal cual se desprende de un artículo

publicado recientemente por la periodista Uzay Bulut, titulado "Turkey uncensored: A History of Censorship and Bans", la cara visible del sistema archivístico turco es simpática y se vanagloria de que sus archivos están abiertos a la comunidad investigadora mundial. La cara oculta es menos amigable: mientras que los fondos con documentación sensible permanecen cerrados a cal y canto, millones de documentos de gran valor para la Historiografía están siendo expurgados y triturados, cuando no vendidos al por mayor como papel viejo, retro trayendo el estado de los archivos turcos a niveles de hace siglos.

Así lo ratificaba el historiador Rifat Bali, que ya abordó esta problemática en 2014, en la obra "The Story of Destruction of Plundering: Printed or Written words, Dead Letters, Archives Thrown Out or Sold for Scrap". Según Bali, los archivos del Senado, de las instituciones administrativas del Gobierno, así como los de los distintos partidos políticos turcos, están cerrados al público o simplemente, han desaparecido. Estos últimos, de acuerdo con Bali, fueron enviados a diferentes fábricas de trituración y reciclaje de papel durante el golpe de Estado del 12 de septiembre de 1980, que llevó al país por tercera vez a la dictadura y gobierno militar.

El panorama pintado por Bali es francamente penoso. Por tomar algunos ejemplos de su obra, en 1998 ciertos documentos confidenciales del Ministerio de Asuntos Exteriores fueron encontrados en las instalaciones de un conocido traperero en Ankara. Cuando el Ministerio de Asuntos Religiosos cambió de sede en 1965, su archivo histórico se mandó destruir porque no cabía en el nuevo edificio. Y las bibliotecas tampoco es que se hayan librado de la purga. En 2013, millones de los libros en grie-

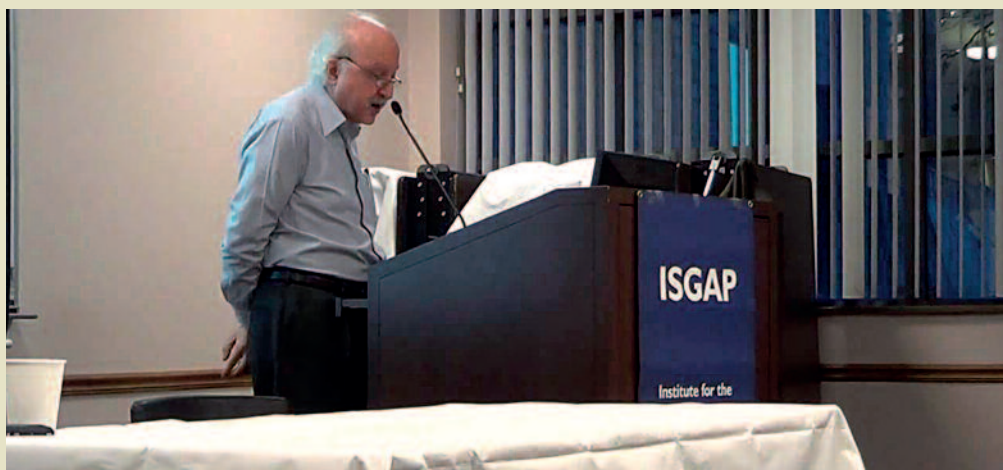


go, hebreo y siríaco pertenecientes al fondo de la Biblioteca Nacional fueron vendidos por toneladas, "debido a que no tenían bibliotecarios capaces de descifrar esas lenguas", según las autoridades.

Un control férreo de censura que se extiende además a internet, ya que cerca de

Con esta actitud y la falta de responsabilidad se está perdiendo y desprendiendo de nosotros la historia que nos podría permitir, comprobar y estudiar en el futuro nuestro camino como sociedad y las pruebas documentales asociadas.

En fin, que unos por vergüenza, por escurrir el bulto,



200.000 sitios web permanecen totalmente bloqueados. Uno de ellos, el portal Wikipedia, entró en esta lista negra al negarse a eliminar determinados artículos que ponían de manifiesto el apoyo de la administración del país a la organización terrorista Estado Islámico.

por callar, por olvidar; y otros en nombre de los sinsentidos, por censurar, por controlar, por doblegar. Al final, la flagrante manipulación de la Historia que nace de destrucciones tan injustificadas y descaradas como estas responderá siempre al mismo mantra: contra la virtud de archivar, el vicio de triturar. ■